Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señor Velásquez y señora Sepúlveda, que modifica el Código Procesal Penal, para excluir la posibilidad de aplicación de salidas alternativas, tratándose de imputados por los delitos contra la Administración del Estado que señala.

I .-ANTECEDENTES:

- 1-- El actual sistema procesal penal contempla una serie de instituciones que permiten poner término anticipado a un procedimiento penal, conocidas como salidas alternativas al procedimiento, estas tienen como finalidad evitar la prosecución del proceso evitando un juicio oral y consecuentemente una posible sentencia condenatoria.
- 2- El ordenamiento jurídico contempla dos tipos de salidas alternativas, la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios.
- 3- Respecto de la primera, la suspensión condicional del procedimiento, la cual se encuentra regulada en el artículo 237 y siguientes del Código Procesal Penal y según lo señalado por la Defensoría Penal Pública consiste en que la causa se suspende (puede ser desde 1 a 3 años) por un período, debiendo cumplir el imputado ciertas condiciones. Al cabo de ese tiempo la causa termina definitivamente sin que quede registro en el certificado de antecedentes. Si durante el tiempo, el imputado comete un nuevo delito o si no cumple con las condiciones fijadas, la causa se reabre y continúa su tramitación.
- 4- Por su parte el Ministerio Público señala que **Suspensión condicional del procedimiento es** en un acuerdo entre el fiscal y el imputado, que se somete a la aprobación del juez de garantía, en el cual el imputado debe cumplir ciertas condiciones durante un período de tiempo, que va desde uno a tres años. Si el imputado cumple con estas condiciones se pone término a la causa sin registrarse ésta en sus antecedentes penales, en caso contrario, se reanuda el proceso. Se aplica cuando el delito cometido es de escasa o mediana gravedad.

- 5- Ahora bien, de esta institución se han planteado una serie de problemas por su aplicación, la principal es la nula capacidad de controlar el fiel cumplimiento de las condiciones impuestas en el acuerdo de suspensión, lo que deriva en una sensación de impunidad por parte de las víctimas y la sociedad en su conjunto.
- 6- A mayor abundamiento, desde la Academia judicial se ha señalado que pese a ser una parte importante en la política criminal nacional , existen “ nudos críticos” en torno a su uso, como el caso del cumplimiento de las condiciones impuestas al no considerar el interés de las víctimas, así como tampoco las posibilidades prácticas de cumplimiento por parte de las personas imputadas, haciendo énfasis además en el precario sistema de seguimiento a su cumplimiento ha determinado que se le considere como una salida que genera márgenes de impunidad.
- 7- Este problema se intensifica cuando se trata de delitos perpetrados por empleados públicos, los cuales, al acceder a este beneficio, burlan su responsabilidad ante la sociedad, acrecentando el sentimiento de impunidad que caracteriza este tipo de delitos.
- 8- Por otro lado, los acuerdos reparatorios son salidas alternativas al juicio penal, donde el imputado y la víctima acuerdan una reparación del daño causado por el delito, que puede ser económica, de servicios, u otra, y que al ser cumplida, extingue la responsabilidad penal del imputado. La Fiscalía, como ente persecutor, puede promover o facilitar estos acuerdos, especialmente en casos donde el delito involucra bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, lesiones menos graves o delitos culposos.
- 9- Al respecto, el Consejo de Defensa del Estado, u otro órgano del estado con personalidad propia puede llegar a acuerdos reparatorios cuando el delito tiene un carácter patrimonial, en el caso de la mayoría de delitos de empleados públicos tienen este carácter.
- 10-La existencia de esta posibilidad, deja nuevamente en entredicho la aplicación de salidas alternativas en este tipo de casos, toda vez que los bienes jurídicos tutelados en esta materia no sólo son de carácter patrimonial, también tienen otro tipo de bienes jurídicos, como la probidad administrativa, la fe pública, la correcta

administración del Estado, entre otros, es decir, son delitos de carácter pluriofensivos.

11-Es de tal importancia este problema, que el ex Fiscal Nacional, Jorge Abbot, el 8 de abril de 2022, a través de la “Instrucción General que imparte criterios de actuación en delitos de corrupción” OFICIO FN 278/2022, instruye a los fiscales cómo proceder en investigaciones en este tipo de delitos.

12-Respecto de la suspensión condicional del procedimiento, instruye a los fiscales a aplicar esta facultad *"en forma excepcional, limitada y prudente, teniendo especialmente en consideración la dificultad que representa controlar el cumplimiento de las condiciones de la suspensión y la señal que podría implicar, para la ciudadanía, una salida de este tipo en delitos de corrupción "*, estableciendo un decálogo de circunstancias que deben concurrir para aplicar la suspensión, añadiendo que toda solicitud debe pasar por aprobación del fiscal regional correspondiente.

13--Respecto de los acuerdos reparatorios, instruye que cuando los fiscales consideren que el delito investigado es pluriofensivo, se opondan a este acuerdo, y excepcionalmente cuando se trate de particulares o corrupción entre estos y la afectación sea de menor entidad, puedan evaluar su procedencia. Con todo, se instruye que la decisión de no oponerse al acuerdo deberá ser aprobada por el Fiscal Regional respectivo.

14-Como podemos colegir, para el ente persecutor, estas salidas en relación a delitos cometidos por funcionarios públicos, la aplicación de las salidas alternativas debe tener un carácter excepcional y pasar por la aprobación de los fiscales regionales, en el entendido de la gravedad y afectación que involucra este tipo de hechos para la comunidad.

15- Sin embargo, si bien valoramos el esfuerzo en este tipo de medidas, consideramos que son insuficientes, por lo que se requiere una modificación legal para limitar su aplicación respecto de los delitos más comunes y grave en esta materia, los que en un caso concreto puedan acceder a estas instituciones.

16- Por último, los delitos que se proponen incluir en la prohibición de aplicación de

las salidas alternativas, se encuentran el delito de malversación de fondos públicos (artículo 233 del CP), Fraude al Fisco (artículos 239 240, 240bis, 241,241bis,del CP) y cohecho (artículos 248, 248 bis, 249, 250 y 250 bis del CP).

II. - IDEA MATRIZ

El proyecto de ley busca establecer la prohibición de aplicación de las salidas alternativas respecto imputados por delitos contra la administración del Estado.

III. .- CONTENIDO DEL PROYECTO

En su artículo único se introduce modificaciones al Código Procesal Penal, prohibiendo la aplicación de las instituciones de la suspensión condicional del procedimiento y de los acuerdos reparatorios para los delitos más gravosos perpetrados por funcionarios públicos.

IV.-DISPOSICIONES DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE QUE SE VERÍAN AFECTADAS POR EL PROYECTO

El proyecto de ley propuesto no afectará otras disposiciones de la legislación vigente.

POR TANTO:

Los senadores que suscribimos venimos en presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo único: Modifíquese la ley N° 19.696 que establece el Código Procesal Penal, en el siguiente sentido:

- 1- Agréguese un nuevo artículo 237 bis, del siguiente tenor:

“Con todo, no se podrá solicitar la suspensión condicional respecto de imputados

por delitos contemplados en los artículos 233,239,240, 240bis, 241, 241 bis,248, 248 bis, 249, 250 y 250 bis del Código Penal.”

2- Agréguese un nuevo inciso final al artículo 241, del siguiente tenor:

“Con todo, el juez negará aprobación a los acuerdos reparatorios convenidos en procedimientos que versaren sobre delitos contemplados en los artículos 233,239, 240,240bis, 241, 241bis,248,248 bis, 249, 250 y 250 bis del Código Penal.